

Memoria de los silenciados

Yezid Campos Zornosa
(CEICOS/MSD, Bogotá, 2003)

Gonzalo Sánchez G.

Profesor, Universidad Nacional de Colombia

ESTE LIBRO PONE LITERALMENTE el dedo en una de las llagas más protuberantes de la Colombia contemporánea. Y lo hace tejiendo de una manera estremecedora las dimensiones individuales y colectivas del trauma que ha dejado una sistemática política de exterminio ante la cual el lector de hoy no puede reaccionar más que con indignación. Pero la sola indignación no basta. El libro es también una invitación a reconstruir los sentidos y los sinsentidos que llevaron a que se cometieran en este país miles de muertes anunciadas, ante la indiferencia, la pasividad o la complicidad del Estado y de la sociedad colombiana.

Porque los episodios que aquí se registran, las vidas y las muertes que aquí se cuentan se inscriben en algunos rasgos estructurales de la política colombiana que precisamente la Unión Patriótica se proponía transformar: el primero de ellos tiene una larga historia; es el modo de estructuración y concepción de los partidos tradicionales que ha hecho de éstos, no mecanismos de adhesión voluntaria, sino sistemas de encuadramiento forzoso de la población. Tratar de ponerse por fuera de ellos, intentar la construcción de una tercera fuerza, una alternativa al reparto bipartidista del poder, es en nuestro país ponerse por fuera del mundo de la política, y en condición de desafío y de amenaza sub-

versiva al orden político. En consecuencia, depurar la política entre nosotros no ha sido hacerla más transparente, sino llenarse de razones para eliminar al adversario.

El segundo rasgo estructural que advierten a menudo los extranjeros, y en este caso el director de la Organización Mundial contra la Tortura, es la capacidad del sistema político colombiano de ocultar las peores atrocidades, tras las rutinarias prácticas de la democracia, fenómeno que por su excepcionalidad hace particularmente difícil llevar casos como éstos de la aniquilación de todo un grupo político a los escenarios internacionales. Haberlo logrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es una proeza que hay que abonarle al tesón de las propias víctimas, de las ONG, como la Comisión Colombiana de Juristas, y en particular de la Fundación Reiniciar que dirige Jahel Quiroga.

El tercer rasgo estructural de la política colombiana, pertinente para esta reflexión, es la forma perversa de encarar la solución al conflicto armado: las guerras civiles entre iguales del siglo XIX, y la desigual de la Violencia de los cincuenta nos acostumbraron a la idea de que la única manera de negociar era con la expedición de una amnistía y en contraprestación la simple dejación de armas y a lo sumo la satisfacción de lo que podríamos llamar algunas demandas políticas de baja intensidad. Con esos antecedentes históricos, y sin advertir las transformaciones de la

naturaleza del conflicto contemporáneo, la sociedad y el Estado le reclaman a la insurgencia que haga política, pero la única manera de hacer política que le permiten es la simple incorporación o cooptación, renunciando a su vocación transformadora.

La Unión Patriótica chocaba contra estas prácticas centenarias de la política colombiana, pese a que su nacimiento estaba marcado expresamente por la función facilitadora de una solución negociada al conflicto armado en el marco de los Acuerdos de la Uribe y del Diálogo Nacional propiciado por el ex presidente Belisario Betancur. Sabido esto, nadie tenía el derecho de ocultar, minimizar o justificar el exterminio de la Unión Patriótica con el argumento de que se trataba de una fuerza política que guardaba simpatías o vínculos con la insurgencia, pues se trataba precisamente de eso: de una fuerza que el Estado se había comprometido solemnemente a respetar para que sirviera de puente en ese difícil tránsito de las armas a la política, es decir, para que cumpliera el papel que por doquier en América Latina desempeñaron tantos movimientos conocidos por todos, como el MAS de Venezuela, el Frente Sandinista en Nicaragua, la Unión Revolucionaria Guatemalteca, el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Si algún pecado le cabía a la UP, era el de haber tenido la audacia de ensayar ese recorrido al comienzo de un proceso de paz y no al término del mismo, como lo hicieron los

otros mencionados. No era fácil para la UP responder simultáneamente a la función de canal abierto de incorporación a la vida democrática, que era para lo cual se la había creado, y a los reclamos de que estableciera un claro deslinde con la insurgencia. La UP quedaba atrapada así entre las pretensiones del Estado y de la sociedad que le apostaban a una cómoda desmovilización sin negociación, en la práctica a la simple rendición, y las de la insurgencia, que con justificadas razones históricas le apostaba a la construcción de garantías previas para no dar el salto al vacío. No hubo espacio para la invención de caminos intermedios. Y lo peor es que el país no ha medido las consecuencias de este *impasse* en los subsiguientes intentos de negociación. Pero lo que sí es claro es que el allanamiento del camino futuro de la paz tiene que pasar de alguna manera por la solución del contencioso de la memoria de la UP, es decir por la culminación de la tarea de la Comisión Mixta (Gobierno-UP) de esclarecimiento de la verdad, aplicación de la justicia a los perpetradores de los crímenes documentados y la reparación integral de las víctimas, para que un día el “Nunca Más” tenga resonancias propias en Colombia y se pueda negociar con un mínimo de confianza.

Éstos son, a mi entender, presupuestos indispensables para abordar el nudo del libro, que es a la vez producto y soporte de estas búsquedas. Se trata, en efecto, de las narraciones de vida de un conjunto pequeño pero representativo de personas que en su doble condición de víctimas y militantes han pasado y viven aún las traumáticas experiencias del exilio, del atentado, del desplazamiento, de la orfandad, de la viudez, de la desaparición forzosa. Pero al mismo tiempo se trata de experiencias

que sólo pueden entenderse en función de un recorrido que para unos comenzó con su trayectoria personal desde la temprana infancia; para otros, con el proceso de conformación de una familia, con la socialización en la escuela, en la vereda, en el barrio, en la Universidad, o en el desempeño profesional, y para la mayor parte, con el momento en que se definieron por una opción de servicio comunitario, de liderazgo social o de acción política. Todos se expresan aquí evocando las circunstancias que precedieron o rodearon el desenlace fatal, circunstancias que acortaban dramáticamente la distancia entre el presentimiento de la muerte y la muerte efectiva: las amenazas en persona, en panfletos o por vía telefónica; los papelitos por debajo de la puerta; los sufragios, las coronas fúnebres, los seguimientos sistemáticos en carros fantasma o plena y desafiantemente identificados; el siniestro conteo de los días, las horas o los minutos que le quedaban a las víctimas para el destierro o la muerte; la ejecución o el rapto de las víctimas ante el llanto, el grito y el desconcierto de los sobrevivientes; el reconocimiento de los cuerpos desfigurados; la fabricación de las “pruebas”, la versión torcida que se le entregaba a la opinión pública. Y luego la sensación de impotencia y la lucha infinita de los que quedaban para seguir contando los muertos, para rehacer la vida, para salvar lo que les quedaba de familia, para organizar la sobrevivencia, para redefinir un futuro profesional, para hacer el duelo, para asumir la pérdida y para vivir en el encierro o en el exilio soledades a menudo insostenibles, en una especie de muerte en vida, de muerte psicológica anticipada. Allí están los dolientes de candidatos presidenciales, parlamentarios, diputados, concejales y pueblo raso. Todas estas experiencias constitu-

yen heterogéneos acervos sociales, políticos y culturales para enfrentar hoy de maneras muy distintas el pasado. Allí están los que tuvieron que vivir solos su tragedia; los que ante la probada responsabilidad del Estado recibieron alguna irrisoria indemnización para tratar de comprar su silencio, y los que consideran deshonoroso recibir tal tipo de indemnizaciones; se escuchan los argumentos de los que no pudieron volver a creer en la viabilidad de la lucha política, de los que, desamparados por la justicia y sabedores que denunciar es colgarse la propia lápida, invocan adoloridos el recurso a la venganza; de los que no quieren o no pueden volver a su tierra, a su región, a su país. Pero también por las páginas de este texto desfilan los que encontraron el apoyo de un pariente, de un vecino, de un copartidario, de una ONG, de un país amigo; los que no renunciaron a saber el cómo, quiénes y por qué lo hicieron; los que quieren, cuando no se puede más, saber al menos los nombres de los que se tragó la muerte, tener la presencia viva de las fotografías del álbum familiar, releer uno de los escritos de puño y letra de sus seres queridos, encontrar así sea sólo los huesos de los desaparecidos para enterrarlos algún día. Están presentes los que quieren que se sepa todo para que no se vuelva a repetir, para que no siga imperando la ley del silencio; los que quieren identificar a los verdugos para mostrarles su pequeñez perdonándolos; los que no pueden dejar de pensar en su vocación de construir país y de los que encuentran de manera admirable renovados motivos de lucha en lo que les ha tocado vivir para dejarle un país mejor a los que vienen. El libro es, pues, un coro a mil voces.

Ahora bien; destacadas estas dimensiones subjetivas en toda su diversidad, volvamos a los nexos con la dimensión colectiva. Y partamos

de un hecho: las víctimas, individualmente consideradas, han sufrido daños y sufrimientos irreparables y pérdidas irremplazables: el esposo, el padre, el hijo, el hermano que partieron y no volverán. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las víctimas y los sobrevivientes esgrimen con distintos niveles de elaboración una certeza fundamental y fundadora: la legitimidad de su militancia política. Para todas, y es lo que le da relevancia a esta investigación, la lucha por el reconocimiento de esta legitimidad del proyecto político es la que le devuelve la

dignificación a las víctimas y a los sobrevivientes; es esa lucha continuada la que les da nuevamente sentido a su pasado y su futuro. Desde este punto de vista, todas acarician la expectativa de una paz duradera, en la convicción de que ella podrá facilitar su proceso de reconciliación con la sociedad y consigo mismas. Pero todo ello, desde luego, con una exigencia de reciprocidad, que el Estado colombiano asuma algún día a plenitud la responsabilidad en los hechos y la deuda de reparación y de justicia con los herederos de la UP. De ahí la importancia de mantener viva la

organización, puesto que es el sentido de pertenencia a ella el que hace que en últimas el dolor amontonado durante años por centenares y miles de seres de carne y hueso se traduzca en proyectos de futuro, en capacidad de movilización y en capacidad de aprendizaje de otros contextos internacionales que también han tenido que inventarse sus propios caminos para sanar su memoria perturbada. Este libro y el video que lo acompaña estremecen, ciertamente, pero también alientan. En ellos, de mil maneras, los vivos hablan para que los muertos vivan.